CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA "La Contraloría del ciudadano"	**REGISTRO** **NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y EN PAGINA WEB "APERTURA E IMPUTACIÓN"** **PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL**		
	Proceso: GE – Gestión de Enlace	**Código:** RGE-32	**Versión:** 01

SECRETARIA GENERAL Y COMUN
NOTIFICACION POR AVISO CARTELERA Y EN PAGINA WEB
AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE PROCESO VERBAL
DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Secretaría General y Común de la Contraloría Departamental del Tolima, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a notificarle por medio del presente **AVISO** a los señores **JOSE JAIME GONZALEZ ENCISO** con cédula de ciudadanía No. 11.314.150 en calidad de Gerente y **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ** con cédula de ciudadanía No. 80.136.308 en calidad de Coordinador Médico Asistencial y Supervisor del Contrato No. 0638-2021 para la época de los hechos respectivamente; del **AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN** No. 005 de fecha 28 de marzo de 2023 dentro del Proceso de responsabilidad fiscal radicado con el No. **112-068-2022** adelantado ante el **HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR DEL LIBANO TOLIMA**, proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima.

Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Se les hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la fecha de Desfijación de este aviso en cartelera y en la página Web Institucional de la Contraloría Departamental del Tolima.

Se publica copia íntegra del Auto en Veinte (20) páginas

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

Se fija el presente **AVISO** en un lugar público y visible, en cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un término de cinco (05) días hábiles, a partir del 08 de mayo de 2023 siendo las 07:30 a.m.

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

DESFIJACION

Hoy, 12 de mayo de 2023 a las 06:30 p.m., venció el término de fijación del anterior **AVISO**, se desfija y se agrega al expediente respectivo radicado con No. **112-068-2022.**

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

Elaboró María Consuelo Quintero

AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 005

En la ciudad de Ibagué Tolima, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del 2023, los suscritos funcionarios de conocimiento y sustanciador de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, procede a proferir Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal **No 112-068-2022**, que se adelanta ante el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano Tolima, identificada con Nit. Número 890.701. 718-7. basado en lo siguiente:

COMPETENCIA.

Este Despacho es competente para adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 268 y siguientes, 271 de la Constitución Política de Colombia, Ley 610 de 2000, la Ordenanza No. 008 de 2001, el Auto de Asignación No. 039 del 23 de diciembre, de 2022, para sustanciar el proceso de responsabilidad fiscal y demás normas concordantes.

FUNDAMENTOS DE HECHO.

En ocasión al contrato de prestación de servicios se encuentra que:

CONTRATO No.	**0638 -2021**
FECHA	30 de julio de 2021
VALOR	$140.000.000
ADICION	$70.000.000
VALOR TOTAL	$210.000.000
PLAZO	31 días
SUPERVISOR	Miguel Antonio Aguilar Pérez, Coordinador Médico Asistencial
OBJETO	Prestación de servicios de personal profesional, técnico y auxiliar calificado para desarrollar el proceso asistencial de apoyo diagnostico en radiología convencional e intervencionista, mamografía y tomografía en el hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E.
CONTRATISTA	SALUD TOLIMA S.A.S NIT. 900.053.771-2
REPRESENTANTE LEGAL	TERESA DE JESUS GARCIA SANCHEZ, C.C. 30.650.392 de Lorica Córdoba

En la Cláusula Segunda. Valor y Forma de Pago: El valor estimado y que las partes en el contrato acordaran para todos los efectos legales y fiscales es de: **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($140.000.000) IVA incluido.** Los precios para los exámenes de tomografía corresponden al 65% del valor total pactado por el Hospital con las aseguradoras o EPS, no incluye la cuota moderadora o copago. Para estudios de mamografía y radiología el 55% del valor pactado por el Hospital con las EPS o aseguradoras, no incluye la cuota moderadora o copago.

Cláusula Cuarta. Obligaciones del Contratista: Numeral 13. Presentar el último día hábil del mes, a la coordinación médica un informe debidamente soportado de las actividades realizadas, para efectos del certificado de cumplimiento, que avalara el pago de los honorarios correspondientes.

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Condición:
Para efectuar el cobro de los servicios prestados el contratista presentó al hospital las siguientes facturas:
Factura FE-540 del 2 de septiembre de 2021, por valor de $202.000.000, discriminada así:
Rayos X por $62.396.489
Mamografías por $10.878.161
Tomografías por $128.725.350
Factura FE-541 del 2 de septiembre de 2021, por valor de $8.000.000, discriminada así:

Servicio de Arco en C por $8.000.000

Con base en la anterior facturación el supervisor del contrato, Miguel Antonio Aguilar Pérez, en su informe del 14 de diciembre de 2021, dejó constancia de los avances de las obligaciones contractuales durante el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de agosto de 2021, indicando que el contratista durante dicho lapso realizó un total de 352 tomografías y 1.860 rayos X, y que además se verifico el informe detallado con fechas y atención brindada a cada paciente, según la relación anexa entregada por el contratista, certificando que dichas actividades se cumplieron y fueron aprobadas por el responsable del proceso, según informe de actividades anexo.

En la auditoría de cuentas médicas realizada por el Hospital, a cargo de Lissette Ximena Echeverry, se formularon glosas a la facturación presentada por el contratista, en cuantía de $830.475, las cuales se respaldan con la sábana de glosas con sus correspondientes observaciones y soportes de las facturas.

Con fundamento en estos soportes el Hospital cancelo la suma de $209.169.525 conforme lo registrado en la Obligación Presupuestal N°OB5-2021004480 del 14 de diciembre de 2021 y transferencia electrónica desde Bancolombia del 10 de mayo de 2022.

SERVICIO	VALOR FACTURADO	VALOR GLOSADO	VALOR CANCELADO
RAYOS X	$62.396.489	$472.928	$61.923.561
TAC	$128.725.350	$261.436	$128.463.914
MAMOGRAFÍAS	$10.878.161	$96.111	$10.782.050
SERVICIO DE ARCO EN C	$8.000.000	$0	$8.000.000
TOTAL	**$210.000.000**	**$830.475**	**$209.169.525**

No obstante, en la revisión efectuada por la auditoria a las planillas aportadas por el contratista y que sirvieron de soporte de las facturas presentadas y canceladas, se encuentra que los registros de los servicios prestados suman $205.731.091, discriminados de la siguiente forma:

SERVICIO	VALOR SOPORTADO	VALOR GLOSADO	VALOR REAL A RECONOCER
RAYOS X	$58.914.266	$472.928	$58.441.338
TAC	$128.769.139	$261.436	$128.507.703

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

MAMOGRAFÍAS	$10.878.161	$96.111	$10.782.051
SERVICIO DE ARCO EN C	$8.000.000	$0	$8.000.000
TOTAL	**$206.561.566**	**$830.475**	**$205.731.091**

En virtud de lo anterior la evaluación del presente contrato arroja una diferencia entre el valor cancelado al contratista ($209.169.525) y el valor de los soportes presentados como respaldo de las facturas ($205.731.091) equivalente a la suma de **$3.438.433** que se convierte en un presunto detrimento de los recursos del Hospital, en razón que la cláusula cuarta, numeral 13, del contrato 638, fijó como una de las obligaciones del contratista, presentar *"un informe debidamente soportado de las actividades realizadas, para efectos del certificado de cumplimiento que avalará el pago de los honorarios correspondientes"*. **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 3.438.433).**

1- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES.

1.2. Identificación de la Entidad Estatal Afectada

Nombre: HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARMILLO SALAZAR
Nit. 890701.701.718-7.

NOMBRE: JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO
IDENTIFICACIÓN: 11.314.150 de Girardot
CARGO: Gerente
PERIODO: 01- 05-2020 a la fecha.
DIRECCIÓN: Calle 5 No. 6ª -21 Edificio Quivana Apartamento 903, Piedra Pintada Ibagué Tolima.

NOMBRE: MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ
IDENTIFICACION: 80' 136.308
CARGO: Coordinador Médico Asistencial- Supervisor
PERIODO: 15-07-2013 a la fecha.
DIRECCIÓN: Calle 93 No.7 sur-131 Bloque 8 Apto 204. Condominio Parque 93 Ibagué Tolima.

RAZÓN SOCIAL: SALUD TOLIMA S.A.S.
NIT: 900.053.771-2
REPRESENTANTE LEGAL: Teresa de Jesús García Sánchez
Cedula de Ciudadanía: 30´650.392

DIRECCIÓN: En la manzana 4 casa 18 conjunto chicalá de la calle 85 número 14ª-50, Ibagué Tolima.

1-3 VINCULACIÓN AL GARANTE.

De conformidad al artículo 44 de la ley 610 de 2000 se hace necesario vincular como tercero civilmente responsable, quienes tendrán los mismos derechos y facultades del principal implicado así:
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
NIT. Número 860.009. 578-6
Póliza Número: 1011000174.
Expedida: 13-11-2020

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Vigencia: Desde 20 -11-2020 hasta 20-11-2021

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
NIT. Número 860.009. 578-6
Póliza Número: 1011000248.
Expedida: 24-11-2021
Vigencia: Desde 20 -11-021 hasta 20-11-2022

INSTANCIAS.

En atención a las disposiciones previstas en el artículo 110 de la ley 1474 de 2011, este proceso se adelantará mediante el procedimiento de única instancia, teniendo en cuenta el certificado de cuantías para contratar de la entidad la cual consta dentro del cd, que soporta el presente hallazgo, da cuenta que el valor de la menor cuantía para la vigencia 2021, fue de **veinticinco millones cuatrocientos treinta y mil setecientos veinte ocho pesos ($ 25´438.728)mc/te**, así como que el valor del presunto detrimento patrimonial asciende al valor total de **CINCO MILLONES DE PESOS (5´000.000) MC/TE.**

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Corresponde a la Contraloría Departamental del Tolima, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma; la cual constituye una especie de responsabilidad patrimonial exigible a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa causen un daño al patrimonio del Estado, al tenor de lo señalado en los artículos 6, 123, 124, 209, 267 inciso 3, 268 y 272 inciso 6 de la Constitución Política de Colombia, Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ley 1564 de 2012 Ley 2080 de 2021 y demás normas concordantes.

NORMAS SUPERIORES.

Artículos 6, 123, 124, 209 y las facultades otorgadas en el Titulo X Capitulo 1 artículos 267 inciso 3, 268 numeral 5 y 272 inciso 6 de la Constitución Política de Colombia.

NORMAS LEGALES

- ✓ Ley 610 de 2000
- ✓ Ley 1474 de 2011
- ✓ Ley 1437 de 2011 CPACA
- ✓ Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso

ACERVO PROBATORIO.

1. Pruebas:

Un CD, el cual contiene:

*Copia del contrato número 638 de 2021
*Copia del estatuto de Contratación
*Manual de funciones
*Certificado de cuantías para contratar
*Copia de pólizas de manejo
*Certificación de ordenación del gasto 2021

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

- Hoja de vida con los respectivos soportes de:
- **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO**
- **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**

En el Hallazgo se incorporan las siguientes **PÓLIZAS**: **Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO, **NIT. Número** 860.009. 578-6, **Póliza Número**: 1011000174. **Expedida:** 13-11-2020, **vigencia:** Desde 20 -11-2020 hasta 20-11-2021 y **Póliza Número**: 1011000248. **Expedida:** 24-11-2021, **Vigencia:** Desde 20 -11-021 hasta 20-11-2022

Documentos que soportan los hechos: Con el hallazgo anexan un CD, dentro del cual contiene la información de los presuntos responsables fiscales (actas de posesión, manual de funciones, fotocopia de cedula de ciudadanía, hoja de vida, certificación de cuantía y los soportes concernientes al Contrato contrato No.638 de 2021).

ACTUACIONES PROCESALES.

- Memorando CDT-RM-202100003983 del 25 de agosto de 2021.
- Auto de Asignación número 118 del 23 de septiembre de 2021
- Formato del traslado el Hallazgo Fiscal No. 038 del 30 de noviembre de 2022
- CD anexo que contiene la siguiente información digital: (Folio 6).

Copia del contrato número 638 de 2021
*Copia del estatuto de Contratación
*Manual de funciones
*Certificado de cuantías para contratar
*Copia de pólizas de manejo
*Certificación de ordenación del gasto 2021

- Hoja de vida con los respectivos soportes de:
- **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO**
- **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**
-

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

La responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 6°, 124 y específicamente en el numeral 5° del artículo 268 de la Constitución Política, que confiere al Contralor General de la República la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

El artículo 124 de la Carta, contentivo del precepto superior denominado Reserva Legal, defiere a la Ley la forma de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, al efecto, en materia de responsabilidad fiscal, dicha prerrogativa legal se ha materializado en la Ley 42 de 1993 y posteriormente en la Ley 610 de 2000, la cual determina el procedimiento para establecerla y hacerla efectiva.

En vigencia de la Ley 42 de 1993, el proceso de responsabilidad fiscal contaba con dos etapas claramente definidas: Investigación y Juicio Fiscal respectivamente, adelantadas por dependencias diferentes. Con la Ley 610 de 2000 y con el avance de la Ley 1474 de 2011, el proceso de responsabilidad fiscal se tramita bajo una sola actuación y por una sola dependencia.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuación eminentemente administrativa. La Ley 610 de 2000, en su artículo 1°., define el proceso de responsabilidad fiscal *"como el conjunto de*

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado".

Esta definición y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso de responsabilidad fiscal y su carácter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestión fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta dañina, determina el alcance del estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

La misma Ley 610 de 2000, en su artículo 4°, señala como objeto del proceso de responsabilidad fiscal el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Agrega además, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

De la misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.

La norma reitera el carácter patrimonial y resarcitorio de la acción fiscal, en el sentido de que mediante la misma se obtenga la reparación patrimonial efectiva que indemnice el daño o deterioro, producido sobre el patrimonio público dentro del ámbito de la gestión fiscal. (Sentencias C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

El proceso de responsabilidad fiscal se orienta por una serie de principios materiales, que devienen del marco constitucional, y de los postulados esenciales del derecho administrativo, procesal penal y procesal civil. A su vez existe remisión normativa autorizada en el \..., que impone que ante los aspectos no previstos se aplicará en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso Ley 1564 de 2012) y el Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con los artículos 2º y 4º de la Ley 610, artículos 29 y 209 de la CP.

Ahora bien, en relación con los principios orientadores de las actuaciones administrativas, el artículo 3º del CCA señala:

> *"[...] Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.*
>
> *1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.*
>
> *En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem."*

Al respecto el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia de Unificación, Expediente No. 0701 de 4 de agosto de 2016, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, indicó:

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

" d.- Ahora bien, la Sala debe precisar que aunque en algunos casos el legislador ha ratificado expresamente la procedencia de los principios y garantías del debido proceso en actuaciones administrativas sancionatorias reconocidos por la Constitución Política (por ejemplo en los regímenes aduanero y disciplinario), el hecho de que en otras materias no exista esa consagración expresa no significa que los distintos elementos que informan el debido proceso no sean aplicables en otros asuntos, pues, como antes se dijo, éste es un imperativo constitucional exigible en todas las actuaciones de las autoridades públicas que puedan afectar los derechos de los particulares.

e.- Entre las citadas garantías mínimas que integran el debido proceso se encuentra el principio de favorabilidad, en virtud del cual una situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos. La Corte Constitucional se refirió al concepto y alcance del principio de favorabilidad en materia disciplinaria e hizo las siguientes consideraciones que, mutatis mutandi, son aplicables también respecto de otras manifestaciones del derecho punitivo estatal: (...)

Así mismo, la Corte Constitucional al abordar el tema de la favorabilidad desde la perspectiva del principio de legalidad precisó que "[como] la potestad sancionadora de la administración no es ajena a los principios que rigen el debido proceso en materia penal, concretamente a la exigencia de que una ley previa deberá determinar con claridad y precisión tanto la infracción como la pena que habrá de imponerse a quienes incurran en ella, es dable concluir que abolida una falta tienen que desaparecer los efectos sancionatorios que la misma estuviere produciendo.

(...)
g.- En el anterior contexto, en esta providencia la Sección Primera unifica su criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas. ".

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controladc" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."

Ahora bien, por tratarse de una actuación administrativa, el proceso de responsabilidad fiscal, está sujeto al control judicial de legalidad de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, según prescripción del artículo 59 de la Ley 610 de 2000.

La Ley 1474 de 2011, introduce unas modificaciones al proceso fiscal, determinando las actuaciones procesales a adelantar, tales como el Decreto y practica de pruebas, los impedimentos y recusaciones, las nulidades y sus saneamientos, como también las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad fiscal, bien sea que el mismo se tramita por la vía ordinaria o verbal.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

De conformidad con el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, el cual señala que la responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

-Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.

- Un daño patrimonial al Estado.

- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

En consecuencia, para efectos de la estructuración de la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de una conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor público o un particular, según el caso, que en el ejercicio de la Gestión Fiscal, produzca un daño sobre fondos o bienes públicos, y que entre una y otro exista una relación de causalidad.

Es necesario enfatizar, que la nueva regulación contiene definiciones de los conceptos de gestión fiscal, como marco natural de la responsabilidad fiscal, y de daño, como elemento objetivo de la misma. Ahora no sólo se concibe el daño, como aquel detrimento que un servidor público le pueda causar al patrimonio público por actos u omisiones, sino de igual forma la afectación producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa o, en general, que no se aplique al cumplimiento de los cometidos estatales.

La Conducta.

La conducta activa u omisiva, imputable al autor del daño, dolosa o gravemente culposa, se refiere a la actuación de un servidor público o de un particular que, autorizado legalmente, despliegue gestión fiscal, en ejercicio de la cual, o con ocasión de ella, genere un daño al patrimonio del Estado.

La calificación de la conducta como gravemente culposa, como elemento de la responsabilidad fiscal, fue precisado por la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2002, cuyos efectos son aplicables a partir del 8 de agosto de 2002, tal como se expuso en Sentencia de tutela T-832 de 2003, donde se aclara que "la fecha de la sentencia debe corresponder a aquella en que se adoptó".

La Gestión Fiscal.

Para efectos de determinar la responsabilidad fiscal, se requiere que la conducta desplegada por parte del servidor público o el particular, funcional o contractualmente, se encuentre en el ámbito de la gestión fiscal, es en consecuencia un elemento sustancial de dicha responsabilidad.

En efecto, la Carta Política señala como atribución del Contralor General de la República, y por extensión normativa del mismo Estatuto Superior a los contralores territoriales, en su artículo 268, numeral 5º la de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

Por su parte, la Ley 610 de 2000, en su artículo 3º., determina que, para los efectos de dicha Ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Consecuencialmente para poder establecer la responsabilidad fiscal derivada de una conducta, ésta debe tener una relación directa con el ejercicio de actos de gestión fiscal. Si la conducta que produce el daño sobre el patrimonio público se despliega por fuera de dicho concepto, estaríamos en presencia de una simple responsabilidad patrimonial, pero no de una de carácter fiscal.

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

No obstante la amplitud del concepto de la gestión fiscal, se requiere a más de la simple disponibilidad material que tienen los servidores públicos sobre el patrimonio público para el cumplimiento de sus funciones (o los particulares, según el caso, cuando administran o custodian dicho patrimonio), tener una disponibilidad o titularidad jurídica sobre los mismos, esto es, que el sujeto tenga la capacidad funcional o contractual de ejercer actos de gestión fiscal sobre ese patrimonio. Si carece de dicha titularidad jurídica, no tiene mando o decisión de disponibilidad sobre los fondos o bienes públicos (así tenga la disponibilidad material), no habría gestión fiscal, y por lo tanto no habría responsabilidad fiscal, sino patrimonial, lo cual obligaría a que la reparación se surtiera por otra vía diversa (v. gr. acción patrimonial ordinaria, o contractual, o a través de la acción civil dentro del proceso penal si lo hubiere, etc.).

El Daño.

El daño, es la lesión al patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio y la consecuente obligación de resarcirlo.

La Ley 610 en el artículo 6º, precisa que para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

Agrega la disposición que dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

Este precepto legal, tiene un carácter enunciativo, pues incluye dentro del concepto de daño, los perjuicios, definidos como la ganancia lícita que deja de obtenerse, o gastos que se ocasionen por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento material causado por modo directo que pueda sufrir la Nación o el establecimiento público.

En consecuencia, habrá que decir que en la cuantificación del daño se debe considerar los perjuicios, y así mismo se debe producir su actualización, es decir traer el daño al valor presente en el momento que se produzca la decisión de responsabilidad, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes, según prescripción del artículo 52 de la Ley 610 de 2000, Sentencia Consejo de Estado de 7 de marzo de 2001, expediente 820 y Concepto 732 de 3 de octubre de 1995.

RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

El artículo 5° de la Ley 610 de 2000, dispone que el daño, la conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal, son requisitos necesarios, para deducir la responsabilidad fiscal respecto a una persona natural, o jurídica, de origen privado, que ejerza funciones de gestión fiscal.

Sobre el nexo causal se ha dicho que este "...consiste en la imputación de un resultado a la conducta o acción humana bien sea con fundamento en factor subjetivo de atribución (culpa o dolo) o con base en el riesgo."

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Tenemos, entonces, que este se refiere a la relación causal que se predica entre la conducta y el daño, la cual puede ser, no solo de origen fáctico, sino que también puede darse en el plano jurídico. Esto en la medida que la producción de un resultado no sólo se determina mediante la realización de una acción positiva en el mundo exterior, sino que también puede ser producto de una manifestación intelectiva que proyecta sus resultados mediante la modificación del mundo sensible.

Así mismo, la causa de un resultado no solo es atribuible al ejercicio de una acción positiva o intelectiva, sino que también puede producirse por la omisión de una atribución jurídica por parte del obligado de la misma, la cual trae como consecuencia la producción del resultado lesivo del daño, en todo caso, ya sea producto de una acción o de una omisión, debe establecerse que la misma es el origen del daño, ya como condición adecuada o como imputación de la omisión, para poderse deducir responsabilidad fiscal respecto al presunto responsable.

DE LOS HECHOS INVESTIGADOS LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

La imputación que se profiere, respecto a la presunta responsabilidad Fiscal de la conducta omisiva gravemente culposa generada por los señores: **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** identificado con cedula de ciudadanía número 11.314.150 de Girardot, en calidad de Gerente Ordenador del Gasto y Representante Legal la entidad. **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cedula de ciudadanía numero 80' 136.308, Coordinador Médico Asistencial-Supervisor y **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 30´650.392, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-2 **REPRESENTANTE LEGAL,** contratista del contrato, en virtud del contrato No.638 al permitir que cancelara una actividad la cual por los soportes encontrados dentro de la ejecución del contrato, no fue realizada, por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 3.438.433.oo)**; actuar que finalmente contribuyó que se ocasionara un presunto daño al patrimonio del Estado, pues en el caso de haber actuado conforme a los deberes como servidores públicos, es decir con sujeción al principio de responsabilidad, eficiencia y eficacia no se habría ocasionado la omisión para vigilar la adecuada inversión y manejo del presupuesto público.

Frente a la responsabilidad del señor **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** identificado con cedula de ciudadanía número 11.314.150 de Girardot, en calidad de Gerente Ordenador del Gasto y Representante Legal de la entidad Hospital Regional del Líbano, se evidencia una omisión a título de culpa grave, en razón a que no ejerció la función de vigilancia, orientación y observación como directo responsable Administrativo, especialmente falta del debido cuidado y control en la verificación del uso de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas de la entidad máxime tratándose de recursos que han sido designados para suplir servicios de un derecho catalogado por la Constitución Política de Colombia como fundamental.

Servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos,

Ante tal actuación, es importante revisar en los términos definidos y particularizados por el objetivo funcional y organizacional, y teniendo en cuenta el mandamiento legal otorgado por la constitución y la ley para servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, para el caso en particular el desconocimiento e inobservancia a las funciones propias de su cargo que se encuentran plasmadas dentro del manual de funciones, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

su cargo entre otras; se encuentra que es el responsable como ordenador del gasto de velar para que todos los compromisos adquiridos con erario público, se cumplan en toda su integridad y que dicho presupuesto sea gastado o ejecutado de manera eficiente y transparente. Realidad que dados los hechos materia de hallazgo se encuentra que pudo haber sido e inobservado por el señor gerente.

Frente a su Responsabilidad, se puede evidenciar según informe de la Auditoria de la Contraloría Departamental del Tolima, adelantada ante el citado ente hospitalario y conforme al acerbo probatorio obrante en el cartulario, existió falta de diligencia y cuidado, así como omisión con cargo a título de culpa grave, en razón a que siendo la persona que en razón a su cargo pues el cargo de gerente y ordenadora del gasto del ente hospitalario tantas veces citado, le correspondía realizar los pagos como el que ocurrió inobservando los reglas establecidas en la entidad hospitalaria pues al permitir que se cancelar cuentas, de contratos sin existir la suficiente documentación que sirviera de soporte con lo cual se lograra tener certeza frente al cumplimiento de cada una de las actividades contratadas como fue la toma total del número contratado de radiologías convencional e intervencionista, mamografía y tomografía en el hospital como quedó enunciado en el informe de auditoría, situación está que generó el detrimento al patrimonio del Hospital Regional del Líbano Tolima, desatendiendo así el deber funcional como Gerente y ordenadora del gasto, tampoco obran soportes si quiera del servicio prestado, lo que permite evidenciar una negligencia protuberante que se puede calificarse a título de **culpa grave.**

Así las cosas y como fue establecido por el Grupo Auditor de este Ente Control mediante el citado hallazgo, es claro entonces que si cancelaron cuentas por el citado ente hospitalario en cabeza del señor **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** gerente y ordenador del gasto sin contar con los requisitos (soportes suficientes) para su cancelación como se indicó en líneas anteriores, lo cual generó el presunto daño patrimonial por el valor ya descrito.

De lo anterior se colige, que las funciones del cargo del gerente y ordenador del gasto, del Hospital Regional del Líbano Tolima, para la época de los hechos exigían una atención cuidadosa; y es que el Manual de funciones, precisamente está elaborado en la Administración Pública para que el servidor público ejerza debidamente el cargo para el cual fue nombrado.

En el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000[1], en correspondencia con el Artículo 4[2] ibídem, al determinarse la .. del daño producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, e inoportuna que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado

en virtud de lo anterior; es decir, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones antes descritas, es claro que el señor gerente para la época de los hechos investigados del **HOSPITAL REGIONAL DEL LIBAN**O, esto **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO**, identificada con la cedula número 11.314.150, es claro que incurrió en una ***conducta tipificada como gravemente culposa,*** por haber omitido su deber funcional, para el caso concreto, el Manual específico de funciones tal y como se describió en líneas anteriores.

[1] **"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal..."

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

unas cuentas sin los suficientes soportes, lo cuales debió requerir al momento de realizar cualquier tipo de pago, por parte del ente hospitalario, lo cual genero el detrimento al erario citado ente hospitalario en la suma ya descrita.

Frente a la Responsabilidad Fiscal la Ley 610 de 2000 señala lo siguiente:

Artículo 1°. *Definición. El proceso de Responsabilidad Fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la Gestión Fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.*

Artículo 3°. *Gestión fiscal. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Gestión Fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.*

En consecuencia, el señor gerente y ordenador del gasto , Identificada con la cedula número 51.763.209 del Hospital Regional del Líbano Tolima, para la época de los hechos investigados, tenía la obligación de exigir toda la documentación soporte para cancelar los contratos de prestación de servicios de mantenimiento de las ambulancias del mencionado ente hospitalario, situación que no ocurrió y por ende cancelaron las cuentas ya descritas sin el cumplimiento de los requisitos, sin la exigencia de los soportes idóneos, lo cual generó el presunto detrimento en contra del citado hospital en un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5´000.000) MC/TE.**

Así las cosas, este Ente de Control se permite concluir en cuanto al primer elemento de la Responsabilidad Fiscal, es decir la conducta, que la implicada en calidad de Gestora Fiscal actuó con ***culpa grave,*** *al realizar esa clase pagos sin la documentación soportes* situación irregular que origino el presunto daño patrimonial al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano Tolima.

Ante lo anterior y en análisis de la actuación desplegada la supervisión del contrato, en cabeza del Coordinador Médico Asistencial señor, **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cedula de ciudadanía numero 80' 136.308, quien actuó como supervisor del contrato numero 638 de 2021, para la época de los hechos y fue responsable directo de la ejecución del mismo, quien denota una falta de control y debido seguimiento, al permitir que se cancelara por unos servicios que no fueron prestados, pues no el expediente no evidencia prueba en contrario, servicios que aunque se encuentran estipulados, circunstancia que se encuentra probada con la actuación desplegada al momento de viabilizar el pago, la cual fue refrendada con su firma en la autorización de los pagos, realidad que evidencia una omisión y descuido, que por demás constituye culpa grave.

El articulo Artículo 118. Establece (...)" Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: ...c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas..."

También resulta relevante, analizar la norma., en cuanto a la responsabilidad de los supervisores de los contratos. Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:

> *En lo que tiene que ver con la responsabilidad del Supervisor, la Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente: "Artículo 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: ...c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.*

Así mismo el Departamento de la Función Pública ha advertido de manera diligente la responsabilidad y deberes de los supervisores; entre otros el concepto número 024831 de 2021, básicamente mediante el control sobre las especificaciones y condiciones en que se dirige la ejecución del contrato y que inciden en la oportuna y adecuada obtención de resultados satisfactorios. El empeño de la entidad no se limita al cumplimiento del objeto y a su calidad. La ejecución contractual debe ajustarse en todo a las exigencias que el entorno le requiera, a los riesgos connaturales al ejercicio de las actividades en consideración del contexto espacial en el que la misma se desenvuelva, no sólo por proteger sus propios intereses sino por mantener el desarrollo del contrato en condiciones normales de ejecución que aseguren su realización. (...)

Y ante lo cual *mismo el Departamento de la Función Pública ha advertido de manera diligente la responsabilidad y deberes de los supervisores ; entre otros el concepto número 024831 de 2021, básicamente mediante el control sobre las especificaciones y condiciones en que se dirige la ejecución del contrato y que inciden en la oportuna y adecuada obtención de resultados satisfactorios. El empeño de la entidad no se limita al cumplimiento del objeto y a su calidad. La ejecución contractual debe ajustarse en todo a las exigencias que el entorno le requiera, a los riesgos connaturales al ejercicio de las actividades en consideración del contexto espacial en el que la misma se desenvuelva, no sólo por proteger sus propios intereses sino por mantener el desarrollo del contrato en condiciones normales de ejecución que aseguren su realización. (...)*

..."En este sentido le corresponde al supervisor del contrato verificar el cumplimiento del objeto del contrato, así como las obligaciones de las partes pactadas en el contrato. Es importante tener respecto del contrato que se supervisa, un permanente contacto que permita establecer la verificación de cumplimiento de manera formal, verificando los requisitos que sean necesarios e indispensables para la ejecución y desarrollo del contrato, así como comprobar y certificar la efectiva y real ejecución del objeto contratado, tareas éstas que luego servirán de sustento para expedir el certificado de cumplimiento que servirá de soporte para el pago de las obligaciones

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

contraídas. Adicionalmente, sobre la responsabilidad de los servidores públicos respecto de la función de supervisión, la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, dispone:

ARTICULO 26. -DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. *En virtud de este principio:*

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. (...)" De conformidad con lo anterior, se concluye que la supervisión es uno de los medios para que las entidades ejerzan la dirección, control y vigilancia de sus contratos, con el fin de lograr el objeto contractual. Por consiguiente, el supervisor, de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, tiene la obligación de desarrollar las actividades que impliquen la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los contratos, función que puede ser asignada a un empleado público siempre que se ajusten a las fijadas para el cargo. Así las cosas, el desempeño de la función de supervisor por parte de un empleado es viable atendiendo a la posibilidad de asignación de funciones diferentes al cargo, siempre y cuando del ejercicio de la funciones específicamente desarrolladas haya una relación directa con el objeto de contrato que se busca supervisar o vigilar ya sea por el conocimiento directo de la actividad o por la experiencia que se tenga en función del contrato o materias del contrato."

Al tenor de lo anterior, resulta claro que la conducta desplegada por el servidor público que fungiera como supervisor del contrato no estuvo acorde a las obligaciones adquiridas al momento de asumir su cargo así como los principios de la contratación estatal, tales como la prevalencia del interés general, transparencia y responsabilidad entre otros, responsabilidad que se adjudica en los términos definidos en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000[3], en correspondencia con el Artículo 4[4] ibidem, al determinarse la causación del daño producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, e inoportuna que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto y en consecuencia los hechos dan cuenta de un ineficiente seguimiento por parte de la persona encargada de la supervisión, quien debió ejercer el debido e integral rastreo, de la ejecución del objeto contratado. Con lo que se puede observar una total ausencia del principio de responsabilidad. Así como una presunta negligencia al no realizar un seguimiento efectivo de principio a fin; en el cumplimiento del contrato, rastreo que se debió haber realizado en aras de salvaguardar el presupuesto asignado por el Hospital para suplir una necesidad propia con el fin de contrastar con su objeto social, de manera que no instituyó correctamente el seguimiento en el cumplimiento del objeto contractual y en especial el cumplimiento de las condiciones ofertadas por la entidad y ofrecidas por el contratista; razón por la cual se denota, que la gestión fue ineficiente y en consecuencia su acción encaja en una acción actuar con ***culpa grave***,.

---

[3] **"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal..."

[4]

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

De otra parte y no menos relevante en la condensación del daño resulta en cuanto a la actuación señora **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ**, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-, contratista con su actuar causo un perjuicio al erario de la entidad, al solicitar el cobro de unas actividades que no realizo y que se encontraban taxativamente estipuladas dentro de las obligaciones contraídas con la entidad, frente a las cuales se obligó a cumplir en forma eficiente y oportuna al momento de la firma del contrato, y que rayan con el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal, que debe ser observada no solo por los funcionarios públicos sino por los particulares. Situación que lleva a que la contratista haya actuado con culpa grave.

Con fundamento en las anteriores consideraciones y una vez demostrados todos los elementos de la responsabilidad fiscal como lo son el daño, la gestión fiscal la conducta cometida a título de culpa grave y el nexo causal, este Despacho Apertura e Imputa Responsabilidad Fiscal en contra de los señores **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** identificado con cedula 11.314.150 de Girardot, calidad de Gerente, representante legal y ordenador del gasto. En la calle 5 No. 6ª - 21 Edificio Quivana Apartamento 903, Piedra Pintada Ibagué Tolima. **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cédula numero 80' 136.308, coordinador médico asistencial y supervisor del contrato, en la Calle 93 No.7 sur-131 Bloque 8 Apto 204. Condominio Parque 93 Ibagué Tolima. Y **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ**, identificada con cedula de ciudadanía número 30´650.392, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-2.

Con fundamento en las anteriores consideraciones y una vez demostrado todos los *elementos de la responsabilidad fiscal como lo son el "Daño", "La Gestión Fiscal" y la* "Conducta" cometida a título de culpa grave y el nexo causal, está probado que su actuar finalmente contribuyó que se ocasionara un daño al patrimonio al Estado, pues, en el caso de haber actuado conforme a los deberes como servidores públicos, es decir, con sujeción al Principio de Responsabilidad, Eficiencia y Eficacia, no se habría ocasionado la conducta omisiva, ineficiente e irregular desplegada por los presuntos responsables fiscales, para vigilar la adecuada inversión del presupuesto público y su correcta ejecución.

En este sentido y conforme a los considerandos antes planteados, se ha determinado un daño patrimonial al erario del Hospital Regional del Líbano Tolima, el cual asciende a la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS (5´000.000) MC/TE,** en los términos como se ilustra a continuación y bajo los argumentos jurídicos ampliamente reseñados en los párrafos.

Dado lo anterior y en observancia con lo estipulado en el artículo 119 de la ley 1474 de 2011..." ***Ssolidaridad.*** En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición *en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.* "...

Con fundamento en las anteriores consideraciones y una vez demostrados todos los elementos de la responsabilidad fiscal como lo son el daño, la gestión fiscal la conducta cometida a título de culpa grave y el nexo causal, así mismo el hecho que se encuentra demostrado la figura de la solidaridad entre quienes tuvieron a cargo la obligación de desarrollar las actividades de vigilancia y seguimiento del cumplimiento del contrato, este Despacho Apertura e Imputa Responsabilidad Fiscal de manera solidaria en contra de los señores: **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** identificado con cedula 11.314.150 de Girardot, calidad de Gerente, representante legal y ordenador del gasto. **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cédula numero 80'

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

136.308, coordinador médico asistencial y supervisor del contrato. Y **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ**, identificada con cedula de ciudadanía número 30´650.392, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-2.

VINCULACIÓN AL GARANTE.

De conformidad al Artículo 44 de la Ley 610 de 2000[5], se hace necesario vincular como Tercero Civilmente, la cual tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado así:

- **Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO**, identificada con Nit. Número 860.009. 578-6, la cual tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado, con ocasión a la pólizas:

- **Numero**: 25- 1011000174.
- **Expedición** : 13- 11-2020
  Vigencia: Desde 20 -11-2020 hasta 20-11-2021

- **Numero**: 25- 1011000248.
- **Expedición** : 24- 11-2021
- **Vigencia:** Desde 20 -11-021 hasta 20-11-2022

Amparar bajo las condiciones de la póliza de servidores públicos, los perjuicios causados a terceros y/o Hospital Entidad Beneficiaria contra las pérdidas patrimoniales sufridas en vigencia de la póliza, que impliquen menoscabo de fondos y bienes públicos, causados por los Servidores Públicos que ocupen los cargos afianzados, por incurrir en conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o que generen fallos con responsabilidad fiscal, gastos de defensa que incurran los directivos para su defensa.

MEDIDAS CAUTELARES.

Así mismo, el Despacho ordena dentro del presente Auto de Apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal, el decreto de medidas cautelares en correspondencia con el Artículo 103 de la Ley 1474 de 2011, el cual define:

"**Artículo 103**[6]. ***Medidas cautelares.*** En el auto de apertura e imputación, deberá ordenarse la

---

[5] **Artículo 44. Vinculación del garante**. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.

[6] **Artículo 103.** ***Medidas cautelares.*** En el auto de apertura e imputación, deberá ordenarse la investigación de bienes de las personas que aparezcan como posibles autores de los hechos que se están investigando y deberán expedirse de inmediato los requerimientos de información a las autoridades correspondientes.

Si los bienes fueron identificados en el proceso auditor, en forma simultánea con el auto de apertura e imputación, se proferirá auto mediante el cual se decretarán las medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio del Estado. Las medidas cautelares se ejecutarán antes de la notificación del auto que las decreta.

El auto que decrete medidas cautelares, se notificará en estrados una vez se encuentren debidamente registradas y contra él sólo procederá el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto, sustentado y resuelto en forma oral, en la audiencia en la que sea notificada la decisión.

Las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado del daño al momento de su decreto. Cuando la medida cautelar recaiga sobre sumas líquidas de dinero, se podrá incrementar hasta en un cincuenta por ciento (50%) de dicho valor y de un ciento por ciento (100%) tratándose de otros bienes, límite que se tendrá en cuenta para cada uno de los presuntos responsables, sin que el

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

investigación de bienes de las personas que aparezcan como posibles autores de los hechos que se están investigando y deberán expedirse de inmediato los requerimientos de información a las autoridades correspondientes.

> Si los bienes fueron identificados en el proceso auditor, en forma simultánea con el auto de apertura e imputación, se proferirá auto mediante el cual se decretarán las medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio del Estado..."

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Avocar conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal No112-068-2022. Adelantado ante el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano Tolima, identificada con Nit: 8907022040-7.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la Apertura e Imputación formal del proceso de responsabilidad fiscal No. 112-068-2022 el cual se adelantará bajo el procedimiento verbal de Única Instancia de acuerdo con el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO. Imputar responsabilidad fiscal, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, de manera solidaria en una cuantía de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 3.438.433.oo,** a cargo de las siguientes personas: **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** identificado con cedula 11.314.150 de Girardot, calidad de Gerente, representante legal 0y ordenador del gasto. En la calle 5 No. 6ª -21 Edificio Quivana Apartamento 903, Piedra Pintada Ibagué Tolima. **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cédula numero 80'136.308, coordinador médico asistencial y supervisor del contrato, en la Calle 93 No.7 sur-131 Bloque 8 Apto 204. Condominio Parque 93 Ibagué Tolima. Y **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 30´650.392, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-2 **REPRESENTANTE LEGAL.** En la manzana 4 casa 18 conjunto chicalá de la calle 85 número 14ª-50, Ibagué Tolima.

ARTÍCULO CUARTO. Vincular como tercero civilmente responsables la cual tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado, a las siguientes compañías de seguros, de conformidad con el artículo 44 de la ley 610 de 2000. A la **Aseguradora Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO**, identificada con Nit. Número 860.009. 578-6, la cual tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado, con ocasión a la pólizas: **Numero**: 25-1011000174. **Vigencia:** Desde 20 -11-2020 hasta 20-11-2021, **Numero**: 25- 1011000248. **Vigencia:** Desde 20 -11-021 hasta 20-11-2022.

Clase de póliza: Amparar bajo las condiciones de la póliza de servidores públicos, los perjuicios causados a terceros y/o Hospital Entidad Beneficiaria contra las pérdidas patrimoniales sufridas en vigencia de la póliza, que impliquen menoscabo de fondos y bienes públicos, causados por los Servidores Públicos que ocupen los cargos afianzados, por incurrir en conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o que generen fallos con responsabilidad fiscal,

---

funcionario que las ordene tenga que prestar caución.

Se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado ante la jurisdicción competente, siempre que exista previa constitución de garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para amparar el pago del valor integral del daño estimado y probado pr quien decretó la medida.

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

gastos de defensa que incurran los directivos para su defensa.

ARTÍCULO QUINTO: Por el trámite del procedimiento verbal previsto en el Capítulo VIII de la Sección Primera, Subsección I de la Ley 1474 de 2.011, citar a audiencia pública de descargos, a las siguientes personas:

JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO, identificado con cedula 11.314.150 de Girardot, calidad de Gerente, representante legal y ordenador del gasto. En la calle 5 No. 6ª -21 Edificio Quivana Apartamento 903, Piedra Pintada Ibagué Tolima. **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cédula numero 80' 136.308, coordinador médico asistencial y supervisor del contrato, en la Calle 93 No.7 sur-131 Bloque 8 Apto 204. Condominio Parque 93 Ibagué Tolima. Y **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 30´650.392, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-2 **REPRESENTANTE LEGAL:** Teresa de Jesús García Sánchez, Cedula de Ciudadanía: 30´650.392. En la manzana 4 casa 18 conjunto chicalá de la calle 85 número 14ª-50, Ibagué Tolima. Así como también a la **Aseguradora Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO,** identificada con Nit. Número 860.009. 578-6, la cual tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado, con ocasión a la pólizas: **Numero**: 25-1011000174. **Vigencia:** Desde 20 -11-2020 hasta 20-11-2021, **Numero**: 25-1011000248.**Vigencia:** Desde 20 -11-021 hasta 20-11-2022.

Diligencia que se llevará a cabo el día 01 de junio, a las 9 am de la mañana; a través de medios de tecnológicos, como la plataforma zoom, con el fin de interactuar virtualmente con los vinculados, abogados y demás intervinientes procesales de lo cual se les estará allegando el link a los correos electrónicos.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar al representante legal Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Calle 4, Av. Los Fundadores #2-111, Líbano Tolima, y correo electrónico del Líbano Tolima en el correo electrónico contactanos@-tolima.gov.co, la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, emitiendo copia de la presente providencia, para que se surta el trámite establecido en el Titulo II Capitulo X numeral 4 del Plan General de Contabilidad Pública.

ARTÍCULO SÉPTIMO: - Notificar personalmente el contenido de la presente decisión; en la forma indicada por el literal (a) del artículo 104 de la Ley 1474 de 2011; concordante con el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, haciéndoles saber que contra el mismo no procede recurso alguno, a las siguientes personas.

- **JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO,** identificado con cedula 11.314.150 de Girardot, calidad de Gerente, representante legal y ordenador del gasto. En la calle 5 No. 6ª -21 Edificio Quivana Apartamento 903, Piedra Pintada Ibagué Tolima. **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ,** identificado con cédula numero 80'136.308, coordinador médico asistencial y supervisor del contrato, en la Calle 93 No.7 sur-131 Bloque 8 Apto 204. Condominio Parque 93 Ibagué Tolima. Y **TERESA DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 30´650.392, representante legal de la persona jurídica de razón social **SALUD TOLIMA S.A.S.** identificada con **NIT:** 900.053.771-2 **REPRESENTANTE LEGAL:** Teresa de Jesús García Sánchez, Cedula de Ciudadanía: 30´650.392. En la manzana 4 casa 18 conjunto chicalá de la calle 85 número 14ª-50, Ibagué Tolima.

ARTÍCULO OCTAVO: Conforme al literal (d) del Art. 104 de la Ley 1474 de 2011, **comunicar** el contenido de la presente decisión en condición de tercero civil responsable a:

Aprobado 12 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

SEGUROS DEL ESTADO, identificada con NIT. Número 860.009.578-6, en la carrera 34 # 4b 20, barrio Cádiz, Ibagué Tolima.

ARTÍCULO NOVENO: Incorporar como pruebas las recaudadas en el proceso tal como las arrimadas en el hallazgo fiscal No 038 del 30 de noviembre de 2022.

ARTÍCULO DECIMO: -DECRETAR las medidas cautelares a que haya lugar.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo no procede Recurso alguno.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Remítase a la Secretaría General y Común para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CRISTHIAN RICARDO ABELLÓ ZAPATA
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

YINETH PAOLA VILLANUEVA MOLINA
Investigador

Aprobado 12 de diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**
La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.